



## **Agua y agricultura en transición: hacia una gestión sostenible y resiliente en la UE y ALC**

III Diálogo agroalimentario UE-ALC



## Agua y agricultura en transición: hacia una gestión sostenible y resiliente en la UE y ALC

III Diálogo agroalimentario UE-ALC

### Autores

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)



### Coordinación



Diseño y maquetación: [albantacreativos.com](http://albantacreativos.com)

Noviembre de 2025



Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

# Índice

<b>Siglas y acrónimos</b>	<b>4</b>
<b>Introducción y marco de referencia</b>	<b>5</b>
<b>1. Bienvenida y apertura</b>	<b>7</b>
<b>2. Contexto del agua y la agricultura</b>	<b>11</b>
2.1. Estrategia de Resiliencia Hídrica de la UE	11
<b>3. Gobernanza para la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector agroalimentario</b>	<b>14</b>
3.1. El rol de los gobiernos, los agentes de apoyo y la perspectiva de los actores productivos en la transición sostenible del agua	14
<b>4. Reflexiones para impulsar la transición hacia una gestión hídrica sostenible en el sector agroalimentario de ALC y la UE</b>	<b>28</b>

## Siglas y acrónimos

<b>ALC</b>	América Latina y el Caribe
<b>ANA</b>	Agencia Nacional de Aguas de Brasil
<b>CAF</b>	Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
<b>CE</b>	Comisión Europea
<b>CEPAL</b>	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
<b>DG AGRI</b>	Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea
<b>DG ENV</b>	Dirección General de Ambiente de la Comisión Europea
<b>DG INTPA</b>	Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea
<b>EUDR</b>	Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea sobre la comercialización en el mercado de la Unión y la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal
<b>IICA</b>	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
<b>INIA</b>	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
<b>ODS</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible
<b>PAC (UE)</b>	Política Agrícola Común
<b>PAC (Brasil)</b>	Programa de Aceleración del Crecimiento
<b>PHP</b>	Plan Hídrico Provincial
<b>SNA</b>	Sociedad Nacional de Agricultura de Chile
<b>UE</b>	Unión Europea



# Introducción y marco de referencia

Desde 2022, el Componente 2 del programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea e implementado por la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), ha desempeñado un papel clave en el fomento del diálogo sobre cadenas de valor sostenibles en América Latina, especialmente, en relación con el Reglamento sobre productos libres de deforestación y degradación forestal de la UE (EUDR).

Sobre esta base, la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA), en estrecha colaboración con la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), ha confiado al Componente 2 de AL-INVEST Verde el desarrollo de los “Diálogos Agroalimentarios UE-ALC” para el periodo 2025-2026, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El objetivo de estos espacios es facilitar intercambios constructivos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe sobre enfoques normativos, técnicos y de políticas relacionados con la agricultura a partir, entre otros, de la reciente Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Visión para la agricultura y la alimentación”, que se puede consultar [aquí](#).

En este contexto se organizó el III Diálogo Agroalimentario UE-ALC, denominado **“Agua y agricultura en transición: hacia una gestión sostenible y resiliente en la UE y ALC”**, el cual toma como base la Estrategia de Resiliencia Hídrica lanzada a final del mes de junio del 2025 por la UE. Esta estrategia reconoce el agua como un bien común estratégico frente al cambio climático y pone énfasis en los riesgos que se generan con la pérdida de biodiversidad y las crecientes tensiones en sus usos.

En el ámbito agrícola, la estrategia entiende que este sector es el principal usuario de agua dulce disponible a nivel global, por lo que subraya la relevancia de transitar hacia modelos de producción más resilientes al estrés hídrico, promoviendo prácticas como el riego eficiente, la gestión sostenible de cuencas, la protección de suelos y la adaptación de cultivos. Asimismo, estos diálogos ponderan el rol de América Latina y el Caribe (ALC) de ser un reservorio global estratégico de recursos hídricos, ya que alberga el 33 % del agua dulce renovable. A nivel agroalimentario, se impulsan diversos esfuerzos nacionales y regionales para fomentar la eficiencia en el uso del agua y la protección de fuentes de agua que son fundamentales para garantizar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria a largo plazo.

De esta forma, el III Diálogo planteó como objetivo promover la comprensión de marcos estratégicos e instrumentos de política que apoyen una gestión sostenible y resiliente del agua en la agricultura en la UE y en ALC, así como iniciar un proceso de intercambio para identificar y difundir medidas eficaces que fortalezcan la seguridad hídrica en el sector agroalimentario de ambos territorios.

El evento se desarrolló en el marco de la Semana Regional del Agua de América Latina y el Caribe 2025, celebrada del 6 al 10 de octubre de 2025 en la sede de CEPAL en Santiago de Chile, como espacio estratégico regional que fomenta el diálogo de las autoridades de la región e impulsa alineamientos y compromisos regionales rumbo a la COP30 en Brasil y la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de 2026, entre otros foros internacionales de alto nivel vinculados a la gestión e inversión hídrica.



# 1. Bienvenida y apertura

La bienvenida del III Diálogo Agroalimentario UE-ALC estuvo a cargo de **Davide Bonechi**, *senior programme manager* de AL-INVEST Verde, quién agradeció a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la acogida en el marco de la Semana Regional del Agua. A continuación, explicó que AL-INVEST Verde es un programa de la Unión Europea para apoyar el sector productivo de América Latina y el Caribe. En esa línea, destacó que el programa busca apoyar la transición sostenible en las cadenas productivas del continente. En particular, el Componente 2 tiene como objetivo fortalecer las políticas e instrumentos públicos que promuevan la producción sostenible en las cadenas agroalimentarias de exportación en ALC, especialmente en el marco del EUDR.

Asimismo, señaló que, a partir de 2025, el programa ha ampliado su alcance, impulsando esta serie de diálogos agroalimentarios con el fin de fortalecer y promover el intercambio birregional en torno a diversas temáticas relacionadas con la sostenibilidad productiva, la innovación y la transición verde. Destacó que esta actividad es coordinada conjuntamente con la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) y la Dirección General de Agricultura (DG AGRI) de la Comisión Europea y se cuenta con la coorganización del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Finalmente, expresó su agradecimiento por el trabajo realizado y el apoyo brindado para hacer posible la realización efectiva de estos espacios de intercambio y construcción para la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios.

Bonechi mencionó que los dos primeros diálogos agroalimentarios estuvieron dedicados a la estrategia para fomentar la ganadería sostenible en la Unión Europea y en América Latina y Caribe, abordando temas clave como la trazabilidad, la transparencia de la cadena de valor y la alineación con el EUDR. Estos espacios permitieron compartir experiencias concretas entre autoridades, sector privado y expertos, fortaleciendo la comprensión mutua sobre los desafíos de sostenibilidad en el sector ganadero.

Además, Bonechi destacó que, con el III Diálogo Agroalimentario, se da inicio a un nuevo ciclo temático enfocado en el agua y la agricultura, un tema esencial para ambos continentes y profundamente interconectado con la gestión sostenible del territorio y la resiliencia climática. Este diálogo tiene como propósito intercambiar experiencias y marcos de políticas y soluciones concretas que fortalezcan la seguridad hídrica agrícola en ambas regiones, así como promover una cooperación efectiva entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Finalmente, expresó sus mejores deseos para todas y todos los participantes, tanto presenciales como virtuales, anticipando un intercambio enriquecedor y una jornada altamente productiva.

Tras las palabras de Bonechi, se dio paso a **Hernán Chiriboga**, representante del IICA en Chile, y **Wilson Ureta**, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego del Gobierno de Chile.

En primer lugar, **Chiriboga** destacó que estos espacios permiten visibilizar de manera positiva al sector agrícola y reconocer su rol estratégico como parte de la solución al desafío hídrico y la resiliencia climática. Agregó que es necesario cambiar el relato dirigido al público en general, ya que persiste la percepción de que la agricultura es el mayor consumidor de agua y generador de metano. Sin embargo, añadió, las formas de producción han estado evolucionando significativamente y, en relación con ello, la agricultura está produciendo de manera mucho más sustentable, con tecnologías más adaptadas al medio ambiente, con certificaciones, sellos y estándares de sustentabilidad.

Añadió que es fundamental involucrar a las personas jóvenes como protagonistas de las próximas generaciones, ya que la producción de alimentos representa el futuro ante el constante crecimiento de la población y la expansión de las ciudades, mientras el campo envejece, en referencia a la mayor edad de quienes trabajan en este sector. Subrayó la necesidad de revertir esta tendencia ya que quienes produzcan alimentos dentro de 15 o 20 años ocuparán una posición estratégica, mientras que “el verdadero poder estará en quienes lo hagan de manera sostenible”.

Además, señaló que, en el marco de los diálogos, es fundamental reforzar las capacidades de comunicación e incorporar nuevas herramientas asociadas al uso de redes sociales, las cuales están ejerciendo una influencia creciente en la opinión pública, incluso determinando resultados electorales mediante estrategias de mercadotecnia digital e inteligencia artificial. Destacó la importancia de comunicar de manera efectiva que la agricultura es parte de la solución a los desafíos actuales y no parte del problema.

Como ejemplo concreto para los diálogos sobre agua y agricultura, presentó una iniciativa denominada “huerta móvil 5/5”, del IICA<sup>1</sup>, denominada así porque su elaboración cuesta menos de cinco dólares y requiere menos de cinco minutos, al tiempo que rescata saberes ancestrales.

Concluyó expresando su deseo de que el diálogo resultara fructífero y contribuyera a reafirmar la intención de que el sector agroalimentario está comprometido en avanzar hacia soluciones sostenibles para atender el desafío hídrico y continuar atendiendo los retos alimentarios a nivel global.

---

1 Más información de este modelo en el siguiente [enlace](#).



Por su parte, **Wilson Ureta** resaltó la relevancia de estos espacios de encuentro entre agentes vinculados a la gestión del agua en la agricultura, al subrayar que contribuyen a desmontar mitos y a promover una reflexión profunda sobre la importancia del uso eficiente del recurso hídrico para el desarrollo agrícola, así como para el progreso nacional y global.

Señaló que, desde el inicio, la Administración chilena había asumido el compromiso de abordar la gestión del agua bajo una perspectiva integral. En este sentido, explicó que la primera tarea del Gobierno había sido definir y comprender el escenario actual en torno a la gestión del agua, especialmente en el ámbito agrícola, considerando el contexto de cambio climático y la necesidad de implementar medidas de adaptación y mitigación

Asimismo, enfatizó que la sociedad debe asumir el desafío actual de gestionar la escasez y no la abundancia. Añadió que las políticas públicas, las instituciones -tanto públicas como privadas-, los organismos de cooperación internacional y los propios agricultores deben actuar en consecuencia. Recordó que en Chile existen unas 900.000 hectáreas de agricultura regada, de las cuales solo un 45 % cuenta con sistemas de riego tecnificado, y que cerca del 75 % del agua dulce del país es utilizada por el sector agrícola. Este panorama, señaló, representa un desafío significativo, pero también una oportunidad para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del recurso.

Entre las medidas adoptadas, destacó la generación de una nueva Ley de Riego, orientada a promover el uso eficiente del agua y a fortalecer la infraestructura de acumulación y conducción hídrica. Indicó que la pequeña y mediana agricultura es el segmento donde persiste un mayor rezago en la tecnificación, pues solo el 10 % de los pequeños agricultores cuentan con sistemas de riego tecnificado. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la gestión asociativa mediante las organizaciones de usuarios de agua, de las cuales más de 4.000 existen en el país, aunque solo 3.000 se encuentran formalmente constituidas y habilitadas para acceder a fondos públicos.

En relación con las políticas de cambio climático, mencionó la Ley Marco de Cambio Climático, la cual integra a todos los ministerios en un objetivo común de reducir emisiones y garantizar que las actividades productivas sean sostenibles tanto en el presente como en el futuro. Resaltó que la agricultura debe asumir un rol protagónico en este proceso, considerando que el agua es esencial para la producción de alimentos.

Además, destacó la incorporación de un enfoque inclusivo en las políticas públicas, señalando que hasta el año 2020 solo el 30 % de los subsidios estatales destinados a la tecnificación del riego o a la construcción de infraestructura hídrica llegaban a mujeres rurales. Sin embargo, tras tres años de gestión del Gobierno, la cifra había alcanzado el 50 %, gracias a la implementación de políticas que responden a las necesidades específicas de las mujeres productoras, muchas de las cuales no eran propietarias de la tierra ni del agua, pero sí usuarias activas del recurso.

Asimismo, subrayó la importancia de adaptar las políticas públicas a las necesidades de los pueblos indígenas, valorando sus saberes ancestrales y su particular cosmovisión sobre el uso del territorio y del agua. En este sentido, mencionó la relevancia de integrar la tecnología moderna con los conocimientos tradicionales en los proyectos de gestión hídrica.

Finalmente, Ureta subrayó que el objetivo último de estas políticas es mejorar la calidad de vida de las personas y hacer de la agricultura una actividad más eficiente, moderna y atractiva para las nuevas generaciones. Enfatizó que la incorporación de tecnologías reducía el esfuerzo físico, aumentaba la productividad y fomentaba el relevo generacional en el campo. Concluyó su intervención resaltando la importancia del intercambio de experiencias y conocimientos entre países, como medio para construir un futuro más sostenible y equitativo para el continente.



## 2. Contexto del agua y la agricultura

### 2.1. Estrategia de Resiliencia Hídrica de la UE

Una vez finalizada la apertura, se dio paso a **Dagmar Behrendt Kaljariková**, oficial de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Ambiente de la Comisión Europea (DG ENV), encargada de presentar la [Estrategia de Resiliencia Hídrica](#) de la UE como parte de la sección de contexto de agua y agricultura.

Destacó el impacto significativo del cambio climático sobre la agricultura y los recursos hídricos y señaló que la agricultura debe formar parte de la solución ante los desafíos del estrés hídrico y las vulnerabilidades climáticas. Explicó que, en el marco de la UE, se trabajaba para garantizar la disponibilidad de agua de buena calidad para todos los sectores, mediante una política sólida y coherente de gestión hídrica, sustentada en la regulación y la planificación estratégica.

A continuación, presentó un panorama general de la política hídrica de la Unión Europea, adoptada en el año 2000, la cual introdujo el concepto de cuenca hidrográfica como eje estructural de la gestión del agua. Este enfoque, precisó, buscaba equilibrar las necesidades ambientales, sociales y económicas, integrando la gestión del recurso desde una perspectiva territorial.

Del mismo modo, explicó que este modelo implica el análisis de las presiones e impactos sobre los recursos hídricos generados por distintos sectores, entre ellos la agricultura, la cual ejerce una presión considerable sobre el recurso. El objetivo principal es alcanzar un buen estado ecológico y químico del agua en los ecosistemas hídricos, promoviendo su salud y sostenibilidad. Para ello, la Unión Europea ha establecido como meta alcanzar un nivel óptimo de *good water status* en todas las cuencas hidrográficas antes del año 2027.

Posteriormente, señaló que los Estados miembros de la UE deben elaborar planes de gestión del agua y programas de medidas concretas para cada cuenca, acompañados de instrumentos económicos que permitan una utilización eficiente de los recursos hídricos y el aseguramiento de fondos de inversión. Destacó que estas acciones se desarrollan en el marco de la cooperación internacional y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.

Indicó además que la estrategia de implementación de la política hídrica europea incluye una plataforma de expertos y autoridades de los Estados miembros, creada para debatir los retos de la aplicación práctica del modelo. Esta red facilita el intercambio de información, documentos y decisiones, disponibles de manera abierta y en línea, sirviendo también como fuente de referencia para otros países.

En este contexto, presentó la [Estrategia de Resiliencia Hídrica](#) de la Comisión Europea, elaborada en junio de 2025, la cual está estructurada en tres objetivos principales:

1. La protección y restauración del ciclo hídrico, garantizando la retención del agua en los suelos y la reducción de la contaminación.
2. La construcción de una economía inteligente del agua, que promoviera el ahorro, el reciclaje y la eficiencia hídrica, manteniendo el crecimiento económico y la competitividad.
3. El aseguramiento de agua limpia y segura para la población y los distintos sectores productivos




En relación con la agricultura sostenible, Kaljariková subrayó la necesidad de compatibilizar las actividades agrícolas con los objetivos de gestión del agua, reduciendo la contaminación y favoreciendo la retención de humedad en los suelos. Resaltó la adopción de la recomendación de eficiencia del agua como principio rector, que establece una jerarquía hídrica: antes de incrementar el suministro de agua (por ejemplo, mediante desalación o recarga artificial), debe reducirse la demanda y aumentarse la eficiencia a través del reciclaje y la reutilización.

Asimismo, destacó la importancia de las políticas de precios del agua, diseñadas para fomentar el uso responsable y eficiente del recurso, y detalló las principales áreas de acción de la UE:

- Mejorar la gobernanza y la aplicación de la legislación hídrica, en coordinación con los Estados miembros.
- Fortalecer la infraestructura de suministro y asegurar una cartera sólida de proyectos que permitiera el acceso a fondos nacionales y privados.
- Impulsar la digitalización en la gestión del agua, aprovechando herramientas de inteligencia artificial, modelado digital y teledetección.
- Fomentar la investigación e innovación en desalación, resiliencia hídrica y desarrollo de capacidades, mediante la creación de una Academia del Agua Europea.
- Promover la seguridad hídrica y la preparación ante riesgos climáticos, mediante la construcción de infraestructura crítica y la mejora del acceso a agua potable y saneamiento.

En el ámbito internacional, reafirmó el compromiso de la Unión Europea con los objetivos de la Agenda 2030, destacando los desafíos persistentes en materia de acceso universal al agua potable y la necesidad de cooperación global para abordar el aumento de la demanda y los efectos del cambio climático. Subrayó también la importancia de proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos, esenciales para la mitigación y adaptación climática, y de fomentar una gestión integrada de agua, energía y alimentación, basada en la economía circular y la cooperación transfronteriza.

Finalmente, abordó la necesidad de cerrar las brechas de financiamiento y fortalecer la gobernanza hídrica global, mediante la generación de espacios de diálogo y coordinación regulatoria a nivel internacional. Mencionó que estos temas serían abordados en la próxima Conferencia del Agua de las Naciones Unidas de 2026, donde se esperaban avances significativos en materia de resiliencia hídrica, sostenibilidad agrícola y seguridad alimentaria.



## 3. Gobernanza para la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector agroalimentario

### 3.1. El rol de los gobiernos, los agentes de apoyo y la perspectiva de los actores productivos en la transición sostenible del agua

Una vez finalizada la intervención de Kaljariková, se procedió con el espacio de diálogo técnico sobre gobernanza para la sostenibilidad del agua en el sector agroalimentario, donde se esperaba conocer el rol de los gobiernos, agentes de apoyo y la perspectiva de los actores productivos en la transición sostenible del agua. La moderadora fue **Mónica Rodrigues**, oficial de Asuntos Económicos de CEPAL.

Para este diálogo técnico, se realizó una pregunta a cada panelista. El encargado de abrir el panel fue **Giuseppe Serra Vieira**, secretario nacional de Seguridad Hídrica de Brasil. La consulta realizada a Serra Vieira fue: en el marco del Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Brasil, ¿cómo se está integrando la seguridad hídrica con la agricultura, en particular en lo referente al riego y la adaptación al cambio climático? Y, mirando a la cooperación birregional, ¿qué aprendizajes de Brasil considera más relevantes para otros países de América Latina y Europa que enfrentan presiones hídricas similares?

En su respuesta, Serra inició recordó que el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional de Brasil es la entidad responsable de los temas relacionados con el agua, la seguridad hídrica, la prevención de desastres a través de la defensa civil y la promoción del desarrollo en zonas desfavorecidas del país.

Presentó los principales lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Brasil, así como los mecanismos de gestión vinculados a las políticas nacionales de recursos hídricos y las estrategias de cooperación regional con otros países de América Latina.

Destacó que este plan se elaboró mediante un proceso participativo que involucró a los gobiernos subnacionales y provinciales, garantizando una construcción conjunta y descentralizada.

El plan, explicó, contempla las principales inversiones para garantizar el uso sostenible del agua tanto con fines sociales como ambientales. Como instrumento técnico, el Gobierno desarrolló con el apoyo de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA), un Índice de Seguridad Hídrica Nacional, que permite mapear las regiones con mayores riesgos de escasez o de desastres relacionados con la falta de acceso al recurso, y orientar así la ejecución de las políticas e inversiones.

Subrayó que, bajo el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una de las primeras acciones fue reactivar el grupo de inversiones estratégicas nacionales en el marco del programa Nuevo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento). Este programa destinó unos 32.000 millones de dólares a inversiones en seguridad hídrica, de los cuales 2.400 millones de dólares se dirigieron a grandes proyectos de infraestructura hídrica, como la construcción de embalses y reservorios de agua.

Entre estas iniciativas, mencionó la planificación de 24 nuevas presas en diversas regiones del país, con especial atención al nordeste de Brasil, la zona más árida del territorio. Estas obras priorizan el abastecimiento de agua para la población y la agricultura familiar, en contraste con proyectos previos orientados principalmente a la generación hidroeléctrica.



Además, destacó la continuidad de las inversiones en el Proyecto de Integración del Río São Francisco, que tiene como objetivo trasvasar agua desde esta cuenca, (la más extensa totalmente brasileña, con más de 2.000 kilómetros de longitud) hacia zonas más necesitadas del noreste. Este proyecto beneficia a miles de personas mediante la distribución prioritaria del agua para consumo humano y agrícola, representando una de las inversiones más significativas en la historia del país, con entre 14.000 y 15.000 millones de reales invertidos (aproximadamente, 3.000 millones de dólares al valor actual).

Además de las denominadas “obras de ingeniería gris”, el Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento incluyó un componente de revitalización de cuencas hidrográficas, orientado a la preservación del suelo, la protección de manantiales y la reducción de la contaminación de los ríos. Para estas acciones se destinaron más de 800 millones de reales, focalizados en los ríos identificados como más vulnerables según estudios ambientales, especialmente el río São Francisco.

En materia de tecnologías sociales e innovación hídrica, el Gobierno destinó 500 millones de dólares a programas enfocados en atender las necesidades de las comunidades rurales del semiárido brasileño, donde la salinidad del agua subterránea representa un desafío persistente. Entre estos programas, destaca el Programa Água Doce (Programa Agua Dulce), orientado a la desalinización del agua en regiones afectadas, así como la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, utilizados principalmente para la producción de alimentos en huertos familiares y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional.

Serra Vieira enfatizó que estas iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno brasileño con una gestión integral y sostenible del agua, que combine infraestructura, innovación y participación comunitaria. Asimismo, señaló la importancia de fortalecer la cooperación regional para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad hídrica y desarrollo territorial.

Finalmente, destacó los temas estratégicos abordados en la intervención, tales como la participación de los gobiernos subnacionales en la planificación hídrica, el uso de métricas técnicas (como el índice de seguridad hídrica) para orientar decisiones de inversión y la relevancia de la gestión comunitaria como componente clave para la sostenibilidad de las políticas públicas.

Por otra parte, la consulta realizada a **Dafne Serrano** fue la siguiente: en Ecuador se realiza un gran esfuerzo por mejorar la eficiencia en el uso del agua agrícola mediante la tecnificación de los sistemas de riego, y en ese contexto, ¿cómo evaluaba el aporte de estas iniciativas a la resiliencia climática y a la sostenibilidad de la producción agrícola?



Serrano, subsecretario de Irrigación Parcelaria Tecnificada de Ecuador, señaló la necesidad de reflexionar sobre la relación entre inversión en infraestructura de riego y el uso eficiente del agua en el sector agrícola. Explicó que, en Ecuador, se había constatado que la tecnificación del riego no consistía únicamente en invertir en sistemas y obras hidráulicas, sino que debía centrarse en el trabajo con el usuario final, lo que implicaba:

- Fortalecer las capacidades de los agricultores para un uso eficiente del agua.
- Generar cambios de comportamiento y hábitos de riego.
- Incorporar procesos de sensibilización y educación hídrica.
- Promover una gestión participativa y responsable del recurso.

Serrano indicó que el riego debe dejar de concebirse exclusivamente como un asunto técnico, ya que, en la práctica, tiene un componente social importante. En las zonas rurales del país, en especial entre pequeños productores del páramo y de la costa, persisten percepciones tradicionales que dificultan el uso eficiente del agua. Mencionó, por ejemplo, que muchos agricultores riegan según costumbre y no conforme a las necesidades del cultivo o a las condiciones climáticas, lo que genera desperdicio del recurso.

Asimismo, señaló que, aunque la inauguración de obras de riego resulta positiva, estas iniciativas pierden efectividad si no van acompañadas de un proceso continuo de capacitación y asistencia técnica. Relató que, a menudo, tras la implementación de un sistema planificado, los agricultores alteran el turno de riego por necesidades inmediatas, lo que causa fallos operativos como la pérdida de presión en las redes.

El subsecretario subrayó que la tecnificación no puede limitarse al equipamiento, como sensores de humedad u otros instrumentos modernos, si no se fortalece la gestión social del riego. Recordó que muchos productores poseen conocimientos empíricos y pueden mostrarse reacios a adoptar nuevas prácticas sin un proceso adecuado de sensibilización.

Señaló también la importancia de ofrecer un acompañamiento técnico permanente, no limitado a capacitaciones puntuales o formales. Explicó que estas deben adaptarse a la realidad de los agricultores, muchos de los cuales son personas de la tercera edad, con bajo acceso a educación técnica, que habitan en zonas de alta ruralidad. Según indicó, es fundamental crear procesos de aprendizaje accesibles, prácticos y sostenibles en el tiempo.

Por último, expresó que en Ecuador se ha comprendido que el éxito de la tecnificación del riego depende del cambio de mentalidad de los usuarios finales respecto al uso del agua. Concluyó que, si bien la inversión en infraestructura es necesaria, la sostenibilidad hídrica solo es posible si se prioriza el acompañamiento técnico y la gestión social, permitiendo que los agricultores comprendan que el agua disponible ha dejado de ser un recurso renovable en la práctica y, por tanto, debe usarse con responsabilidad. Cerró su intervención reiterando la importancia de promover una cultura de uso eficiente del agua para garantizar resiliencia climática y sostenibilidad productiva en Ecuador.

El siguiente panelista fue **Antonio Walker**, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), a quien se le consultó lo siguiente: como representante del gremio productivo en Chile, ¿cómo percibe el sector privado agrícola los desafíos de sostenibilidad hídrica? La pregunta se hacía considerando que estos desafíos incluyen sin duda la resiliencia agrícola frente al cambio climático, pero también la necesidad de seguir en un mercado competitivo que presenta cada vez más requerimientos y que tiene que cumplir con las exigencias de las políticas de los lugares de exportación, como la UE.

Walker destacó la relevancia del tema de la sustentabilidad del agua y la agricultura, calificándolo como un asunto complejo, profundo y central para el cumplimiento de la misión del sector agrícola: alimentar a Chile y al mundo.

Explicó que, ante las proyecciones de aumento del 50 % en la demanda mundial de alimentos en los próximos años, el desafío de garantizar la seguridad alimentaria global debe enfrentarse en un contexto marcado por el cambio climático, la escasez de agua y suelo fértil, y una reducción de la mano de obra agrícola. En este marco, la Sociedad Nacional de Agricultura impulsa un cambio de paradigma, buscando transitar de una potencia agroalimentaria a una potencia ecoalimentaria, basada en la producción sustentable de alimentos saludables.

Walker enfatizó que Chile cuenta con una agricultura altamente sustentable, dado que, de sus 75 millones de hectáreas, solo 1,8 millones están destinadas a cultivos anuales y permanentes, lo que representa apenas el 2,4 % de la superficie nacional. Esta condición, añadió, permite conservar una gran biodiversidad con más de 35.000 especies y 187 ecosistemas diferentes.

Asimismo, recordó que en el país se riegan alrededor de 900.000 hectáreas, equivalente al 1,2 % del territorio nacional, y que el desafío principal consiste en duplicar la superficie cultivada y regada, aprovechando de mejor manera los recursos hídricos disponibles. Explicó que, debido a la geografía chilena, caracterizada por una cordillera alta y un territorio angosto, el 80 % del agua fluye hacia el mar, sin ser aprovechada plenamente para



uso agrícola. Indicó que solo con el aprovechamiento del 20 % de ese caudal, sería posible duplicar la superficie bajo riego, alcanzando niveles similares a los de países vecinos como Perú, que riega 2,6 millones de hectáreas.

Walker señaló también el compromiso del sector agrícola con la neutralidad de carbono. Destacó que Chile emite apenas el 0,24 % de las emisiones globales, pero captura más del 70 % de ellas mediante sus 15 millones de hectáreas de bosque nativo, 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, 8 millones de hectáreas de praderas naturales, humedales y suelos vivos. Subrayó la importancia de transformar los suelos degradados en suelos fértiles, dado que los primeros emiten CO<sub>2</sub> mientras que los segundos lo capturan, permitiendo así a Chile consolidarse como productor de alimentos carbono neutros.

En relación con el recurso hídrico, sostuvo que el uso agrícola del agua es un uso noble, ya que transforma el recurso en alimentos. No obstante, advirtió la urgencia de acelerar la construcción de infraestructuras, pues el país cuenta con solo 32 embalses activos. Asimismo, instó a impulsar la desalación de agua, señalando que Chile posee solo 24 plantas desaladoras, frente a las 27.000 existentes a nivel mundial.

Por otra parte, destacó los avances en cobertura de agua potable en Chile, señalando que el país se encuentra entre los de mayor cobertura a nivel mundial. Precisó que la cobertura urbana alcanza un 99 %, con altos estándares de calidad del agua, mientras que la cobertura rural en zonas concentradas es del 98 %. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos en las zonas rurales dispersas, donde la cobertura es de aproximadamente el 40 % y cerca de un millón de personas aún carecen de acceso a agua potable.

Además, indicó que la legislación chilena establece la prioridad del consumo humano sobre otros usos del agua y valoró los avances derivados de la reforma al Código de Aguas, promulgada tras once años de discusión parlamentaria. Consideró que esta nueva gobernanza del agua representa un progreso sustantivo en la regulación y administración del agua.

En la parte final de su intervención, Walker llamó a derribar mitos y prejuicios en torno al uso del agua y la agricultura, apelando a debates técnicos basados en datos y evidencia científica, en lugar de discusiones ideológicas. En este sentido, distinguió entre los movimientos ambientalistas y los ecólogos, destacando que estos últimos aportan una visión científica y equilibrada de los impactos y balances de emisiones de cada sector económico.

Concluyó su exposición reafirmando la disposición del gremio agrícola a contribuir en la transición hacia una agricultura sustentable, tecnificada y ambientalmente responsable, capaz de garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático global.

A continuación, se pasó a conocer la visión de la Unión Europea en estos temas. Para esto, se le planteó la siguiente pregunta a **Patrick Kelly**, oficial de Políticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea: desde la perspectiva de la Unión Europea, ¿qué instrumentos o líneas de política se consideran claves para fortalecer la acción entre agricultura y sostenibilidad hídrica, considerando aquellas que pudieran ser interesantes para el intercambio con América Latina y el Caribe?

Kelly subrayó los desafíos vinculados al agua y la sostenibilidad en el sector agrícola. Indicó que el mundo vive bajo fuertes presiones ambientales y los efectos del cambio climático están impactando directamente en la agricultura. En este contexto, resaltó que el desafío consiste en garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la estabilidad económica de las y los pequeños productores y sus familias.

Explicó que la Unión Europea ha construido un sólido marco regulatorio que integra de forma prioritaria la gestión del agua. Destacó que uno de los principios clave es que solo es posible gestionar de manera adecuada aquello que se pueda medir, por lo que la regulación sobre el uso y reutilización del agua se considera fundamental para su manejo sostenible en la agricultura.

Añadió que, en el período de políticas agrícolas vigente hasta 2027, la Unión Europea ha incorporado instrumentos orientados a mejorar la gestión productiva y ambiental del agua en el medio rural. En este sentido, señaló que se implementa un régimen de condicionalidad ambiental, mediante el cual los agricultores debían aplicar prácticas sostenibles para acceder a determinados incentivos económicos. Entre los instrumentos clave mencionó:

- Regulación ambiental integrada en la Política Agrícola Común (PAC).
- Condicionalidad para acceder a incentivos económicos.
- Planes estratégicos nacionales adaptados a cada Estado miembro.
- Promoción de prácticas agrícolas regenerativas y conservación del suelo.
- Gestión sostenible del agua en sistemas agrícolas.



Entre las prácticas sostenibles destacadas, mencionó la agricultura regenerativa, el manejo eficiente del suelo y la adopción de tecnologías que permitan un uso racional del agua. Reconoció que la adopción de nuevas tecnologías en el campo representa un desafío, especialmente por las resistencias naturales al cambio, pero insistió en que era un esfuerzo necesario y con alto impacto positivo.

Kelly señaló también que la Unión Europea promueve inversiones tanto productivas como no productivas relacionadas con infraestructura hídrica, almacenamiento de agua de lluvia, reutilización del agua y modernización del riego. Agregó que estas prácticas podrían ser adaptadas a diferentes contextos geográficos y productivos, incluidos los países de América Latina y el Caribe, si se realizaban los ajustes adecuados.

Hizo referencia a la importancia de integrar la gestión de riesgos hídricos, recordando que muchas regiones deben enfrentar tanto la escasez como el exceso de agua. En este punto, subrayó la necesidad de diseñar estrategias integrales que abordaran fenómenos como sequías e inundaciones, dado que ambos afectaban de forma significativa la estabilidad de los sistemas agrícolas.

Asimismo, destacó que la Unión Europea ha incorporado instrumentos financieros y seguros agrícolas para apoyar a los productores ante eventos climáticos extremos. Tales instrumentos se incluyen en los mecanismos de prevención y gestión de crisis que cada país miembro puede activar según sus necesidades.

Finalmente, Kelly resaltó el papel clave de la asistencia técnica y la transferencia de conocimiento como pilares para fortalecer la sostenibilidad agrícola. Explicó que la digitalización ofrece nuevas herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del agua, a través de tecnologías de información aplicadas al sector agrícola. Concluyó que la combinación de regulación, investigación, incentivos financieros, innovación tecnológica y capacitación rural constituye la base de una transición hacia sistemas agrícolas sostenibles. Señaló

que gran parte de estas experiencias podrían ser compartidas y adaptadas para fortalecer la cooperación con América Latina y el Caribe.

A continuación, se consultó a **María Teresa Baduí**, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza. Esta provincia argentina enfrenta una compleja realidad, una agricultura centrada en ciertas cadenas de valor, con un panorama internacional complejo, competencia creciente por el uso del agua con los riesgos de la minería en zonas áridas, y la urgencia de adaptarse a la escasez. Frente a este contexto, ¿qué líneas considera prioritarias para avanzar en eficiencia hídrica agrícola?

Baduí contextualizó la estructura federal del país, señalando que en la República Argentina las provincias son titulares de los recursos naturales, lo cual plantea desafíos específicos para la implementación del concepto de gestión integrada del recurso hídrico.

Destacó que la provincia de Mendoza se ubica geográficamente a la misma latitud que Santiago de Chile, separada por la cordillera de los Andes, la cual representa tanto un lazo de integración binacional como un reto compartido en materia de gestión del agua. En ese marco, informó que Mendoza ha iniciado trabajos conjuntos con regiones chilenas, como Coquimbo, con el fin de fortalecer la cooperación técnica y territorial en torno a los recursos hídricos.

Asimismo, señaló que el diálogo entre países y regiones debe centrarse en las problemáticas comunes, más allá de las diferencias geográficas o institucionales. Subrayó que el desafío de la agricultura no debe plantearse en oposición a otras actividades económicas, ya que la provincia cuenta con una matriz económica diversificada, en la que la agricultura representa aproximadamente el 7 % del producto bruto geográfico. Sin embargo, reconoció que el 82 % del agua disponible se destina a fines agrícolas, lo que implica la necesidad de buscar equilibrios sostenibles entre los distintos usos del recurso.

En este sentido, sostuvo que el debate no debía centrarse en una dicotomía entre sectores, sino en asumir los desafíos y definir acciones concretas orientadas a la resiliencia y adaptación al cambio climático. Indicó que Mendoza está elaborando un Plan Hídrico Provincial, con proyecciones hacia los años 2030, 2040 y 2050, en el cual se realiza un análisis profundo de la oferta hídrica, que evidencia una reducción significativa de la disponibilidad del recurso.

Ante este escenario, el plan propone un cambio de paradigma, basado en la gestión de la demanda en lugar de la simple distribución de la oferta. Este nuevo enfoque, explicó, requiere un conocimiento detallado de los usos y consumos hídricos y una sistematización de datos que pudieran transformarse en información útil para la toma de decisiones.

Baduí recordó que Mendoza presenta un régimen de precipitaciones muy bajo, de 220 milímetros anuales, y depende casi exclusivamente de la nieve de la cordillera como fuente de agua. Por ello, su sistema de conducción se basa principalmente en canales y, en menor medida, en reservorios, razón por la cual una de las principales líneas de acción del plan es mejorar la eficiencia hídrica mediante la impermeabilización de canales y la construcción de reservorios.



Explicó que la implementación de reservorios flexibles permite avanzar hacia un modelo de “riego a la demanda” o “riego acordado”, que busca optimizar la entrega del agua según las necesidades específicas de cada cultivo. Este sistema, señaló, representa un cambio conductual y cultural importante frente a la rigidez histórica de los canales tradicionales. La meta es reemplazar la uniformidad en la distribución por una gestión más eficiente y oportuna, adaptada a la realidad productiva.

En paralelo, informó que la provincia impulsa financiamientos para mejorar la eficiencia intrapredial, complementados con programas de capacitación agrícola. Las tasas de interés se subsidian de manera adicional cuando los productores participan en estos procesos formativos, garantizando así que la inversión en infraestructura se acompañe de una comprensión técnica del uso eficiente del agua.

Asimismo, destacó la experiencia provincial en reutilización de aguas residuales: aproximadamente 10.000 hectáreas se encontraban bajo riego con este tipo de agua.

Hacia el final de su intervención, enfatizó que la infraestructura hídrica debe considerarse un medio y no un fin en sí mismo, y que la sostenibilidad del vínculo entre agua y agricultura también depende de la forma de financiamiento y del reconocimiento del valor económico del agua. Planteó la necesidad de debatir quién financia, quién paga y cómo se valora el beneficio del recurso, reconociendo que, si bien es una conversación compleja, resulta indispensable para una planificación responsable.

Finalmente, resaltó la importancia de la cultura de repago de las obras de riego en la provincia de Mendoza, y valoró el espacio del evento como una instancia de intercambio

de buenas prácticas entre países y regiones. Concluyó señalando que la provincia continuaba avanzando en una línea de acción coherente con las estrategias planteadas por la Unión Europea, particularmente en materia de eficiencia, gestión de la demanda y sostenibilidad hídrica.

En este panel también era importante reconocer el rol de agentes vinculados al financiamiento, para lo que se contó con la participación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con la presencia de **Franz Rojas**, director de Análisis de Agua y Saneamiento de esta entidad. La pregunta que se le realizó fue al impulso del Banco a múltiples proyectos de riego e infraestructura hídrica en América Latina y el Caribe: ¿podía compartir cuáles eran los principales esfuerzos y acciones que estaban desarrollando en la región al respecto y cómo estaban priorizando el financiamiento para este propósito?

Rojas inició su intervención destacando la visión estratégica del Banco de Desarrollo respecto al rol de América Latina y el Caribe como “región solución” en materia de producción alimentaria y sostenibilidad. Señaló que la región produce alimentos para unos 1.300 millones de personas, es decir, el doble de su población, y que es el primer exportador neto de alimentos del mundo, incluso por encima de América del Norte. Sin embargo, advirtió que persisten profundas asimetrías sociales: 41 millones de personas padecen hambre, 190 millones sufren inseguridad alimentaria y más de 180 millones no pueden acceder a una dieta saludable, lo que revela importantes desafíos estructurales.



En ese contexto, explicó que, desde la experiencia del Banco de Desarrollo, el riego constituye un elemento central para fortalecer la seguridad alimentaria regional, razón por la cual la institución lanzó en 2024 la Estrategia de Prosperidad Agropecuaria. Esta estrategia complementa la Estrategia de Seguridad Hídrica liderada por su equipo, incorporando un enfoque de agricultura resiliente y regenerativa y promoviendo soluciones integrales que combinan infraestructura, gestión del recurso hídrico y desarrollo productivo. Señaló que, en los últimos 10 años, Banco de Desarrollo ha invertido cerca de 4.000 millones de dólares en proyectos vinculados al sector agrícola y al uso del agua, y que la nueva estrategia proyecta movilizar 8.500 millones de dólares adicionales hasta 2030, más del doble que en el período anterior, lo que demuestra la progresiva relevancia que los países de la región le han venido dando al tema.

El expositor advirtió de que fenómenos climáticos como las sequías representan un riesgo creciente para la región. Indicó que, en los últimos cinco años, los daños económicos asociados a sequías han superado los 20.000 millones de dólares, es decir, cuatro veces más que en los 20 años previos, lo cual evidencia la necesidad urgente de fortalecer la gestión hídrica.

Posteriormente, mencionó algunos proyectos emblemáticos, entre los que destacó:

- **Bolivia.** Proyecto Presas Resilientes: inversión de 240 millones de dólares para la construcción de nueve o diez presas destinadas a almacenamiento de agua y mitigación de riesgos climáticos.
- **República Dominicana.** Proyecto Alto Mao: modernización mediante canalización entubada para reducir pérdidas por infiltración y evaporación y mejorar la eficiencia del riego.

Rojas subrayó que aún existen desafíos pendientes, como la falta de normativas en algunos países para el reuso de agua en agricultura, lo que limita la implementación de proyectos más innovadores. Por ello, destacó que es necesario avanzar simultáneamente en infraestructura y reformas de política pública.

Finalmente, reiteró que, a pesar de que América Latina y el Caribe concentraban alrededor del 30 % del agua dulce disponible del planeta, la distribución del recurso es desigual, lo que exige un manejo controlado y eficiente.

A continuación, se dio un espacio para conocer los aportes de la UE en materia de tecnología e investigación. Para ello se contó con la intervención de **Benjamin Van Doorslaer**, oficial de proyecto de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, a quien se planteó la siguiente consulta: como experto de una región que ha logrado avances significativos en la adopción de soluciones innovadoras en la gestión sostenible del agua, ¿qué elementos podrían favorecer un mayor desarrollo y adopción de tecnologías para fomentar la eficiencia del uso de agua en el sector agroalimentario?

En su respuesta enfatizó cuatro puntos principales: el enfoque en la transferencia del conocimiento, la importancia de la participación de múltiples actores y el concepto de faros y laboratorios vivos, y finalmente, la aplicación internacional y de cooperación. Sobre



el enfoque en la transferencia del conocimiento, subrayó la importancia de mejorar su transferencia hacia los usuarios finales, especialmente los productores agrícolas. Explicó que, en muchos casos, los agricultores desconocen los avances en gestión hídrica y las redes o programas destinados a promover prácticas sostenibles. Por ello, consideró clave fortalecer los mecanismos de comunicación y educación entre los centros de investigación, las instituciones y los actores rurales.

Mencionó que, en la experiencia europea, las ferias agrícolas han constituido plataformas relevantes para la difusión de buenas prácticas e innovaciones, permitiendo acercar la ciencia al campo. Sin embargo, sostuvo que es necesario realizar mayores esfuerzos para mejorar esta conexión dentro de la cadena de valor, de modo que los resultados de la investigación puedan traducirse en soluciones prácticas y aplicables.

Sobre la importancia de la participación de múltiples actores, Van Doorslaer señaló que una estrategia que promueve la investigación multidisciplinaria y participativa se encuentra orientada a generar resultados más fiables, relevantes y socialmente útiles. Explicó que este enfoque permite cocrear soluciones al involucrar desde el inicio a los distintos sectores interesados: investigadores, productores rurales, empresas vinculadas a la bioeconomía, consumidores, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y representantes de gobiernos. La selección de actores debe adaptarse a los objetivos específicos de cada proyecto, asegurando la pertinencia y efectividad del proceso de innovación.

Van Doorslaer introdujo luego el concepto de “faros vivos” (*living lighthouses*), inspirado en las prácticas europeas, faros que, al igual que los “laboratorios vivos” (*living labs*), buscan cerrar la brecha entre la investigación científica y la práctica agrícola.

Explicó que estos espacios representan entornos de experimentación aplicada, donde se desarrollan soluciones en condiciones reales de campo, permitiendo validar tecnologías

y prácticas directamente en las explotaciones agrícolas. A diferencia de los laboratorios tradicionales, los faros vivos implicaban la participación de los usuarios finales desde las primeras etapas del proceso, lo que aumentaba significativamente la probabilidad de adopción de las innovaciones.

Destacó tres componentes esenciales de este modelo:

1. La cocreación de soluciones junto a los actores involucrados.
2. El desarrollo en contextos de vida real, más allá de los ensayos controlados.
3. La demostración práctica de los beneficios de las nuevas tecnologías, acompañada de capacitación y comunicación.


Según explicó, los laboratorios vivos permiten demostrar los beneficios técnicos de las innovaciones, mientras que los faros vivos ofrecen un espacio de difusión, formación y replicabilidad. Ambos enfoques, complementarios, favorecerían la escala y sostenibilidad de los resultados.

Sobre la aplicación internacional y cooperación, mencionó que el programa de investigación de la Unión Europea ha incorporado en su agenda reciente la expansión del modelo de laboratorios vivos hacia regiones de África, América Latina y el Caribe, con especial atención a la salud del suelo y la eficiencia en el uso del agua.

Van Doorslaer indicó que la adopción de esta metodología permitiría mejorar la resiliencia hídrica, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola en países fuera del continente europeo. Subrayó que el intercambio de conocimiento y tecnología es esencial para fortalecer la cooperación internacional y promover una transición agroecológica equitativa y global.

Finalmente, concluyó su intervención reiterando que la investigación colaborativa y la innovación participativa son herramientas fundamentales para fortalecer la gestión sostenible del agua en la agricultura, mejorar la productividad y aumentar la resiliencia del sector frente al cambio climático.





## 4. Reflexiones para impulsar la transición hacia una gestión hídrica sostenible en el sector agroalimentario de ALC y la UE

Una vez finalizado el diálogo con los panelistas, se dio un espacio de reflexiones para impulsar la transición hacia una gestión hídrica sostenible en el sector agroalimentario de la UE y ALC. Este punto estuvo a cargo de **Alba Llavona**, Experta en Gestión del Recurso Hídrico del IICA.

En su intervención, destacó que, aunque pueda parecer evidente, no es habitual que en los debates vinculados a los sistemas agroalimentarios se coloque la gestión hídrica en el centro de la discusión, a pesar de su relación directa con la producción de alimentos. Subrayó que sin agua no hay agricultura y, por lo tanto, “no hay seguridad alimentaria”.

A su vez, comentó que la jornada permitió conocer el enfoque de la Unión Europea, reflejado en su Estrategia de Resiliencia Hídrica, la cual promueve objetivos como la protección del ciclo del agua y la creación de una economía inteligente en el uso del recurso hídrico, basada en la reducción de la demanda y la eficiencia.

Llavona explicó que Europa cuenta con un sólido marco normativo, respaldado por instrumentos como la Directiva Marco del Agua, la normativa sobre inundaciones, agua potable y reutilización, lo que aporta coherencia y soporte regulatorio a sus acciones. En contraste, señaló que en ALC existe un panorama más diverso. Si bien se han desarrollado esfuerzos de integración regional, estos acuerdos son en su mayoría no vinculantes y coexisten con marcos nacionales heterogéneos, con avances desiguales entre países.

No obstante, en esa diversidad, precisó, destacan ejemplos que se mencionaron durante el panel y que ilustran avances regionales por la resiliencia hídrica. Citó el caso de Chile, que a través de su nueva Ley de Riego prioriza a pequeños y medianos productores, incorpora soluciones basadas en la naturaleza y articula esfuerzos país con la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, destacó la experiencia del Plan Nacional de Seguridad

Hídrica de Brasil, que incluye inversiones por 32.000 millones de dólares en infraestructura hídrica y 500 millones de dólares en tecnología para zonas rurales.

Al referirse a los motores del cambio en la región, explicó que estos no provienen únicamente del ámbito normativo gubernamental, sino también de los productores. Señaló que la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles en torno al agua se ha impulsado a menudo por la crisis hídrica. Indicó que la región enfrenta tanto sequías severas como inundaciones, con pérdidas económicas significativas: 14.000 millones de dólares en Argentina en 2023 por sequía y 1.500 millones de dólares en Brasil en 2024 debido a inundaciones, como ejemplos recientes.

En esa línea, destacó que la Estrategia de Resiliencia Hídrica de la Unión Europea constituye una referencia interesante para fomentar el intercambio de conocimientos con ALC, al integrar de manera explícita a la agricultura como sector clave en la gestión del agua. Elementos como el riego por goteo, la agricultura de precisión, la reutilización del agua, la mejora de la gestión del suelo, la reducción de contaminación y el fomento de cultivos resistentes al clima son herramientas de interés para fomentar el intercambio de experiencias y soluciones entre la UE y ALC.

A modo de conclusión, Alba Llavona afirmó que ALC vive un momento crucial para impulsar transformaciones estructurales hacia una gestión hídrica sostenible en el sector agrícola. Señaló que es fundamental que los gobiernos acompañen al sector productivo no solo mediante financiamiento, sino también mediante gestión social del agua, promoción de innovación y comunicación pública que muestre cómo el buen manejo del agua contribuye a la resiliencia climática y económica.

Para cerrar su intervención, señaló que una de las grandes lecciones de Europa es su capacidad de articulación regional y planteó que ALC debe fortalecer sus mecanismos de cooperación e integración para avanzar con firmeza hacia una verdadera resiliencia hídrica regional.



Tras la intervención de Llavona, **Andrea Damiani**, programme manager del AL-INVEST Verde, destacó la reflexión técnica, construcción conjunta y compromiso birregional manifestados durante la jornada.

Se refirió al agua como “mucho más que un recurso productivo” que constituye un vínculo estratégico para conectar la sostenibilidad ambiental, la productividad agrícola y el bienestar social entre ambas regiones. En esta línea, agregó que los desafíos relacionados con la gestión hídrica son comunes para Europa y América Latina y el Caribe, pero también, destacó, las oportunidades de cooperación para abordarlos de manera conjunta.



AL-INVEST Verde es un programa de la Unión Europea (UE) que promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular. A través del Componente 2, liderado por FIAP en consorcio con IILA, el programa proporciona asistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas y los diálogos entre múltiples partes interesadas sobre las cadenas agrícolas y de valor sostenibles, las normas ambientales y laborales, así como la política comercial y económica sostenibles y los marcos regulatorios.

[www.alinvest-verde.eu](http://www.alinvest-verde.eu)

**El Componente 2 de AL-INVEST Verde es un consorcio implementado por**

